



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 398 - 2018 - GRJ/GRI  
Huancayo, 21 NOV 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

### VISTO:

El Informe Legal N° 586-2018-GRJ/ORAJ de fecha 19 de noviembre de 2018; Reporte N° 363-GRJ-DRT/DR, el recurso de apelación interpuesto por el Sr. PEDRO ROLANDO HUANUCO TUMIALAN contra la Resolución Directoral Regional N° 1423-2017-GRJ-DRTC/DR de fecha 29 de diciembre del 2018,; y;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme fluye de los actuados, mediante Resolución Directoral Regional N° 1423-2017-GRJ-DRTC/DR de fecha 29 de diciembre del 2018, se resuelve cesar en la carrera administrativa por límite de edad 70 años, al servidor PEDRO ROLANDO HUANUCO TUMIALAN, obrero permanente con cargo de Jefe de Taller III, nivel remunerativo ST-A plaza 026.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1007-2018-GRJ-DRTC/DR de fecha 05 de setiembre del 2018, se resuelve reconocer al ex servidor PEDRO ROLANDO HUANUCO TUMIALAN –en adelante el impugnante-, obrero permanente con cargo de Jefe de Taller III, nivel remunerativo ST-A, 42 años, 07 meses y 04 días al 30 de diciembre del 2018 de servicios prestados al estado. Asimismo, se otorga el pago de CTS por 30 años calculados de la remuneración principal de conformidad a los artículos 43° y 54° del Decreto Legislativo N° 276. Tercero.- Con fecha 24 de setiembre del 2018, el impugnante interpone recurso de apelación contra la Resolución señalada en el considerando anterior, a fin de que el superior con mejor estudio de autos lo declare FUNDADO y se proceda a declarar su nulidad y se ordene a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín que se le pague la Compensación por Tiempo de Servicios de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 650, conforme ya ha sido establecido en la Resolución Gerencial Regional Infraestructura N° 127-2015-GRJ/GRI.

Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS (en adelante el TUO), conforme el Principio de Legalidad, señala: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el Derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo a los fines para los que le fueron conferidas"; así también, el numeral 1.5 del citado artículo, el cual regula el Principio de Imparcialidad, establece que "las autoridades administrativas actúan sin ninguna





"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general".

Que, la Resolución Directoral Regional N° 1007-2018-GRJ-DRTC/DR de fecha 05 de setiembre del 2018, le otorga CTS al impugnante, basándose principalmente en el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases del Carrera Administrativa y remuneraciones del sector público y decreto supremo N° 005-90-PCM, que aprueba el reglamento de la Carrera Administrativa y demás normas conexas, al respecto de ello cabe dilucidar si dichas normas son las adecuadas para otorgar dicho beneficio a los obreros permanentes, como es el caso del recurrente que ocupada el cargo de Jefe de Taller III, nivel remunerativo ST-A plaza 026.

Que, conforme se ha desarrollado ampliamente y establecido en reiteradas Resoluciones Regionales de Infraestructura, que han declarado fundado el recurso de apelación planteado por el impugnante, debido que se ha establecido en la resolución recaída en el expediente N° 3519-2003-AA/TC, generado a partir de una acción de amparo interpuesta por un grupo de trabajadores contra PROVÍAS Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el régimen laboral de los obreros al servicio del Estado, en el sentido que éste es el de la actividad privada. Debe señalarse que esta posición refleja la interpretación que sobre el particular ha hecho el referido órgano como máximo intérprete de la Constitución. En tal sentido, podemos colegir que el personal obrero que prestaba servicios al Estado (entiéndase en el Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales) se encontraban comprendidos en el régimen de la actividad privada, por lo que les corresponde percibir los derechos y beneficios de dicho régimen. Determinándose de manera clara y precisa, que la naturaleza del régimen laboral de los obreros que prestan servicios al Estado, los mismos que se encuentran bajo el régimen privado, tal como lo establece la Autoridad del Servicio Civil (SERVIR), que mediante Informe Legal N° 131-2010-SERVIR/GG-OAJ, de fecha 02 de junio del 2010; señalando en su primera conclusión que "El régimen laboral aplicable a los obreros al servicio del Estado es el de la actividad privada. En consecuencia, el cálculo de la compensación por tiempo de servicios que corresponde a tales trabajadores, debe hacerse conforme a dicho régimen, observando fundamentalmente el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 001-97-TR".

Que, en ese mismo orden de ideas, el máximo intérprete de nuestra Constitución, en relación a la vigencia de la Ley N° 11377 y las leyes N° 8439 y N° 9555, así como la aplicación del régimen laboral de la actividad privada a los obreros que laboran para el Estado, establece: "5. Que, al respecto, el segundo párrafo del Artículo 1° del Decreto Ley N° 11377 ha establecido que "(...) los que realicen labores propias de obreros en las dependencias públicas, estarán comprendidos sólo en las disposiciones que específicamente se han dictado para estos





*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

servidores (...)" . Así los obreros, se encontraban sujetos a su propia normativa, regulada por la Ley N° 8439, que en su artículo 3 señaló que los beneficios sociales que les correspondían, se equiparaban a los establecidos en la Ley N° 4916 – Ley que regulaba los derechos de los trabajadores pertenecientes al régimen de la actividad privada; y mediante Ley N° 9555, de fecha 1° de abril del año 1942 que modificó a la Ley N° 8439 aún vigente, se hicieron extensivos a los obreros que prestaban servicios al Estado, los derechos que otorgaba la Ley N° 8439, razón por la cual los mismos se encontraban sujetos al régimen de la actividad privada". "6. Que, siendo ello así, los obreros que prestaban servicios al Estado desde la modificatoria de la Ley N° 8439 se encontraban comprendidos en el régimen de la actividad privada y les correspondía percibir los derechos derivados del mismo, razón por la cual, si bien aquellos obreros contratados por el Estado recibían la denominación de servidores públicos por encontrarse prestando servicios en reparticiones del Estado, el régimen bajo el cual servían era el de la actividad privada, correspondiéndoles únicamente la aplicación del Decreto Ley N° 11377, respecto a las facultades de dirección del empleador estatal; es decir, el establecimiento de normas para la prestación del servicio, horarios, remuneración, procesos administrativos, entre otros aspectos, mas no las normas del régimen público..."

Que, en consecuencia, ha quedado establecido por el máximo intérprete de las normas a nivel nacional, que por mandato de la Ley N° 9555, los obreros que prestan servicios para el Estado enmarcan su relación con su empleador, el Estado, bajo el régimen de la actividad privada; por lo que el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR, establece en su artículo 9° que constituye remuneración computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre disposición.

Que, la liquidación de la CTS del administrado, debe realizarse conforme al marco legal; es decir desde el 25 de julio del año 1991 en adelante se debe aplicar el Decreto Legislativo N° 650 que establece en su artículo 10° que "la remuneración computable a la Compensación por Tiempo de Servicios se determina en base al sueldo de los meses de abril y octubre de cada año"; y para los periodos anteriores a la dación de dicha norma, se aplicará lo dispuesto por la Ley N° 23707, modificada por la Ley N° 25223, la cual establece que "la compensación por Tiempo de Servicios de los trabajadores sujetos a la Ley N° 23707 se calcula sobre su último sueldo". En ese entender, el Tribunal Constitucional, el Tribunal del Servicio Civil y la diversas Cortes Superiores de Justicia en reiterada jurisprudencia han determinado que los obreros que trabajan en la Administración Pública se encuentran bajo los alcances del régimen laboral de la Actividad Privada y por tanto este grupo de trabajadores que prestan servicios al Estado desde la modificatoria de la Ley N° 8439 se encuentran dentro de los alcances del régimen laboral de la Actividad Privada y





*"Año del Buen Servicio al Ciudadano"*

les corresponde percibir los derechos derivados del mismo, si tienen la denominación de servidores públicos esto es por encontrarse prestando servicios en las reparticiones del Estado.

Que, por lo tanto, la Resolución materia de cuestionamiento, al momento de calcular la compensación por Tiempo de Servicios (CTS), ha aplicado normatividad que no corresponde a su condición de trabajador obrero de la Administración Pública, pues conforme obra en los actuados su persona durante todo el tiempo que laboro en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Junín, tuvo la condición de Obrero Permanente, encontrándose sujeto a la normativa regulada por la Ley N° 8439, en cuyo artículo 3°, se determinó que, los beneficios sociales que le correspondían se equiparaban a los establecidos en la Ley N° 4916 (Ley que regulaba los derechos de los trabajadores pertenecientes al régimen laboral de la actividad privada). Posteriormente, con la Ley N° 9555 (modificatoria de la Ley N° 8439), se hizo extensivo a los obreros que prestan servicios al Estado los derechos que otorgaba la Ley N° 8439, razón por la cual estos trabajadores empezaron a estar sujetos a las disposiciones del régimen laboral de la actividad privada.

Que, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el impugnante, en consecuencia la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 1423-2017-GRJ-DRTC/DR de fecha 29 de diciembre del 2018, en virtud del artículo 10° del TUO, señala que "son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias..."; por lo que en el presente caso, dicha resolución no se ha ajustado al marco legal aplicable para el régimen laboral del administrado en cuanto al cómputo de la Compensación por Tiempo de Servicios, habiéndolo considerado para dichos efectos como servidor del Decreto Legislativo 276, cuando le corresponde aplicar lo dispuesto por la Ley N° 9555, vigente a la fecha; lo cual genera su nulidad.

Que, estando a lo dispuesto por el numeral 12.1 del Artículo 12° del TUO, que dispone que "la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto..."; razón por la cual deberá retrotraerse el acto hasta que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, emita nuevo pronunciamiento ajustando el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios del administrado conforme lo expuesto.

Por los fundamentos expuestos en el presente y contando con el visado de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el literal d) Artículo 21° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias:

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- FUNDADO** El recurso de apelación interpuesto por el Sr. PEDRO ROLANDO HUANUCO TUMIALAN contra la Resolución



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Directoral Regional N° 1423-2017-GRJ-DRTC/DR de fecha 29 de diciembre del 2018, conforme a los fundamentos expuestos; Consecuentemente **NULA** dicha Resolución Directoral Regional N° 1423-2017-GRJ-DRTC/DR de fecha 29 de diciembre del 2018; conforme a los considerandos expuestos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- RETROTRAER**, el procedimiento administrativo hasta que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, emita nuevo pronunciamiento ajustando el cálculo de la compensación por Tiempo de Servicios del administrado conforme lo expuesto.

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución, al administrado, a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín y a los demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

ING. ALFREDO POMA SAMANEZ  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribe a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

22 NOV 2018

Abog. A. Antonia Vidallon Ruelas  
SECRETARIA GENERAL